



Honorable  
Cámara de Diputados  
de la Nación  
REPÚBLICA ARGENTINA

**INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO CASTAGNETO C.D.**

TEMA: SIMPLIFICACIÓN Y DESBUROCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.  
SIMPLIFICACIÓN Y DESBUROCRATIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA.  
SIMPLIFICACIÓN Y DESBUROCRATIZACIÓN PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA NACIÓN.

EXPEDIENTE Nº 6828-D-2017, 6829-D-2017, 6830-D-2017

En primer término, no puedo dejar de mencionar que estos proyectos que estamos tratando en forma conjunta, son la reproducción del DNU que debió ser discutido y tratado en primer lugar, tal como lo solicitó nuestro jefe de bloque, el compañero Agustín Rossi. Ello, por cuanto es lo que corresponde en derecho, pues primero debe derogarse un régimen y luego discutir su reemplazo para evitar tener una superposición normativa.

Efectuada esta aclaración, procederé a desarrollar la temática, y para ello nada mejor manifestar que cuando me llegó el proyecto y observé que se trataba de "simplificar y desburocratizar" me alegré mucho.

Inmediatamente, pensé que íbamos a discutir y tratar un proyecto de ley que solucionaría mucho la vida de los argentinos.

Qué bueno me dije, y que bien le vendría a cada vecino de mi provincia y a cada argentino saber que desde el gobierno y con el apoyo del Congreso vamos a facilitar y solucionar muchos de sus problemas.

Sin embargo, cuando analicé su texto, comprendí que se trataba de seguir dando un paso más en el achicamiento del Estado y en pulverizar el derecho de los que más necesitan.

Aquí vemos como el gobierno, va en forma paulatina y gradualmente cercenando derechos de la ciudadanía, en pos de lograr un objetivo cercano que es achicar el déficit. En ese contexto, en lugar de promover el consumo, la producción y generar las condiciones para que



pueda exportarse, aplica una política de enfriamiento y achicamiento del Estado. Con esa política lo único que se logra es que tengamos un Estado débil, endeudado, al que se le despojan día a día sus bienes, y una ciudadanía en franco descenso de su calidad de vida.

Como ya se expusiera, este proyecto, es una parte del paquete de reformas que fue realizado en pleno enero mediante el dictado del “megadecreto”.

En síntesis, el “megadecreto” es una pata más del conjunto de medidas cuyo carácter de redefinición central del aparato estatal lo enmarcan dentro de la estrategia de iniciativas políticas que el Gobierno decidió encarar para imprimir al Estado y a la sociedad, en general, su particular impronta.

En definitiva, estamos repitiendo el modelo político de la década del 90. Ello por cuanto, el éxito de esa política la daban las ganancias de los grupos más concentrados de la Argentina, la ausencia de las corridas bursátiles y la magnitud de las inversiones especulativas de los buitres.

Para un gobierno, que hace del contraste de formas de gestión con su antecesor una verdadera muletilla de comparación y legitimación política, el “megadecreto” de reforma del Estado, llamado, no inocentemente, de “Simplificación y Desburocratización”, expresa con claridad meridiana la enorme distancia que media entre la esfera discursiva y las prácticas concretas de la gestión de Cambiemos.

En primer término, muestra como este gobierno sigue avanzando en la agenda de las reformas pendientes que los sectores dominantes tienen para con la sociedad argentina.

Estas leyes, tienen la particularidad de mostrar el verdadero objetivo de la gestión del gobierno, que es copiar el modelo de los 90. Es decir, el modelo de endeudarse, privatizar, desregular y abrir la economía, que permitían que la Argentina fuera vista como “alumno modelo” por parte de los organismos financieros internacionales, el FMI y el Banco Mundial.



Honorable  
Cámara de Diputados  
de la Nación  
REPÚBLICA ARGENTINA

Amparado en el ideal de simplicidad, modifican aspectos centrales del patrimonio público, como son la administración de bienes del Estado, las licitaciones en Obras Públicas y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

Es entonces, que la única conclusión que cabe es que la simplicidad esconde seguir entregando las “joyas de la abuela” de todos los argentinos.

Bajo el techo de la simplicidad, se echa mano a aspectos centrales de la normativa financiera como son las modificaciones a la Unidad de Información Financiera. Se trata aquí de aplicar la normativa que permita aceitar el funcionamiento de una estructura económica plenamente inmersa en un ciclo de sobreendeudamiento, especulación financiera y fuga de capitales.

Respecto de los cambios de la normativa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, pareciera que la única intención es la de “empaquetar” los créditos a jubilados y otros, constituir fideicomisos financieros, comercializarlos y volver a utilizar el dinero recaudado, sin especificar si será para nuevos créditos u otros destinos.

Aquí no debemos olvidar que hoy el acreedor de los préstamos es el mismo Fondo de Garantía de Sustentabilidad, quien al hacer una cesión irrevocable a un fideicomiso dejará a los potenciales deudores en manos de los bancos o de instituciones financieras privadas que acelerarán cualquier ejecución. La pretensión –explícita- de usar los activos del fondo para la especulación resulta obscena y puede jugar en contra de los mismos intereses que defender; hoy, más del 60 por ciento de la cartera está formada por deuda pública.

Alquilar o prestar bonos para que privados los vendan especulando con recomprarlos más baratos es como tirarse un tiro en el pie, ya que ese universo de bonos puede ser usado para subir los rendimientos y obligar a la Argentina a tener que pagar más tasa por sus colocaciones.

No podemos permitir que se hipoteque el futuro de nuestras familias; con esta ley se termina de vaciar la caja de los jubilados.



Honorable  
Cámara de Diputados  
de la Nación  
REPÚBLICA ARGENTINA

Otro aspecto sustancial es que el proyecto de ley también apunta a centralizar la administración de bienes estatales. Entre otras cosas, dispone que los bienes afectados a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependientes del Ministerio de Desarrollo Social, pasen a la órbita de la AABE, con el argumento de que este organismo se especializa en la actividad inmobiliaria.

Es muy triste que edificios que fueron creados, donados, legados para atender las necesidades de los niños puedan convertirse en modernos centros financieros o exclusivos *shoppings*.

No podemos, como peronistas, renunciar a ese sabio precepto de nuestros conductores, ya que llevamos grabado en nuestra concepción que los únicos privilegiados son los niños.

Para nosotros, nuestra concepción es que la niñez es continuadora de nuestras luchas por una sociedad mejor y una patria más grande, como lo proclamaba Eva Perón.

En cada edificio dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, hemos renovado la ilusión de miles de niños con nuestro trabajo inclusivo, con el deporte social, entre miles de ejemplos que podría dar.

En definitiva, en esos edificios, el trabajo de la inclusión y de la lucha contra el flagelo de la desigualdad social, se ha convertido en un hito para las políticas de Estado, y ese derecho no puede rifarse al mejor postor a través de una inmobiliaria.

Es importante hacer notar que este proyecto de ley, en línea con la mayoría de las medidas implementadas por este gobierno, tiene un claro objetivo de favorecer al capital privado, especialmente el más concentrado, desarmando las capacidades regulatorias y de control del Estado con la fantasía de que así se facilitarán las siempre esperadas y nunca concretadas inversiones.



Honorable  
Cámara de Diputados  
de la Nación  
REPÚBLICA ARGENTINA

Finalmente, no podemos dejar de alertar que estas decisiones en pos de desregular la actividad económica y de simplificación tendrán, al igual que en el pasado, un correlato inmediato en nuevas cesantías y despidos de trabajadores del Estado.

Estas medidas, sirvieron en los 90 para destruir gran parte del tejido productivo local, fomentaron el desempleo, destruyeron capacidades estatales regulatorias y de control, y al mismo tiempo, incrementaron los niveles de concentración y centralización del capital y ahondaron la desigualdad.

El déficit se soluciona y termina, creando trabajo, mejorando el consumo, competitividad, apostando al crecimiento con inclusión social y trabajando para que los hijos superen a sus padres en calidad de derechos.

Esa es la Argentina que queremos, y en esto de proponerse, vamos a estar sin dudas acompañando esas políticas con nuestro voto.

De una vez por todas, debemos dar vuelta la página de la historia para no volver a cometer los errores de los 90.

#### **INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO FERNANDEZ LANGAN**

TEMA/S: Sobre los regímenes de Simplificación y Desburocratización para el Desarrollo de la Infraestructura; Simplificación y Desburocratización de la Administración Pública Nacional y Simplificación y Desburocratización para el Desarrollo Productivo de la Nación.

O.D. N°23,24 y 22 - EXPEDIENTE N°6828-D-17 6829-D-17 6830-D-17



Honorable  
Cámara de Diputados  
de la Nación  
REPÚBLICA ARGENTINA

Hace décadas el Estado se convirtió en una institución burocrática, lenta y al servicio del poder político.

Nosotros entendemos al Estado como un facilitador. El Estado tiene que estar al servicio de los argentinos para acompañar el crecimiento de cada uno y ayudarlos a vivir mejor, no para complicarles la vida.

Tenemos que trabajar juntos para cambiar esta idea del Estado como entorpecedor e ineficiente, que trata al ciudadano como un cadete, haciéndolo ir de un lugar a otro con dependencias totalmente desconectadas entre sí.

Tenemos que transformar al Estado para que sea eficiente, moderno, ágil y transparente.

Es un trabajo difícil, porque por culpa de tantos años de abandono, el Estado se quedó atrás. No tenía ni las herramientas ni la tecnología para modernizarse y se convirtió en un obstáculo.

Hace dos años empezamos a trabajar para que simplificar y desburocratizar el Estado sea posible.

En esta sesión debatimos una serie de leyes que, en consonancia con el espíritu de reforma permanente que promueve el presidente Macri, van en ese mismo sentido de desburocratizar y simplificar el Estado, mejorando su relación con los ciudadanos y el sector productivo.

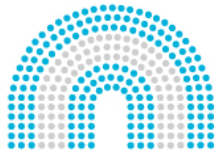
Esto es importante porque nos está impidiendo crecer. Con estas medidas estamos sacando trabas a los ciudadanos y a las empresas para que puedan desarrollar todo su potencial.

Todas las modificaciones incluidas en estas leyes se hacen con el espíritu de simplificar normas, modernizar la administración pública, federalizar procedimientos e incentivar el desarrollo y el crecimiento de nuestro país.

Por ejemplo, las pymes representan el 99 por ciento de las empresas del país y emplean a más de 4.1 millones de trabajadores, lo que representa el 70 por ciento del empleo privado.

Por eso, con estas leyes estamos tomando una serie de medidas para incentivar su crecimiento con el objetivo de seguir generando empleo formal de calidad, promover su desarrollo y fomentar su competitividad en el mercado mundial.

En primer lugar, estamos creando el Registro Pyme para que exista una categorización unificada y ampliada sobre lo que es o no una pyme, incorporando a las micropymes.



Honorable  
Cámara de Diputados  
de la Nación  
REPÚBLICA ARGENTINA

Esto es positivo porque las pequeñas y medianas empresas ya no van a tener que estar pasando por distintos organismos con distintos criterios para acreditar su condición.

Además, estamos ampliando las posibilidades de financiamiento para las pymes ya que los emprendedores y las microempresas también podrán acceder a los créditos que otorga el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor. Hasta ahora solo podían acceder al financiamiento de este fondo los emprendimientos con menos de siete años.

Pero la realidad es que hay muchas empresas que tal vez tienen más de siete años pero tienen ideas innovadoras y ganas de crecer, invertir en el país, generar empleo, y también tenemos que acompañarlas.

De esta manera las estamos cuidando y fomentando su crecimiento para que sigan invirtiendo y brindando empleo de calidad.

También estamos rediseñando el sistema de garantías FOGAPyME y lo reemplazamos por el FoGAR, para darle más alcance y que sea cada vez más inclusivo.

Este sistema hoy financia solo a 13.000 pymes, y esto es muy poco sobre un universo de 850.000 pequeñas y medianas empresas.

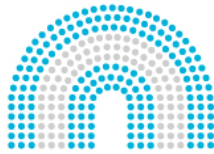
Estamos ampliando las garantías otorgadas por las sociedades de garantías recíprocas a empresas y terceros en general para que puedan acceder al financiamiento que necesitan para seguir creciendo.

A su vez, estamos promoviendo los microcréditos a través del Foncap y eliminando barreras para que las empresas más chicas puedan desarrollarse y crecer.

En línea con las recomendaciones de organismos internacionales que promueven mejores prácticas institucionales, como la OCDE y el GAFI, unificamos el registro de sociedades en el Ministerio de Justicia.

Estamos transparentando la constitución de las sociedades, al modificar los artículos 34 y 35 de la ley 19.550, para que se prohíba expresamente la designación del socio oculto o aparente. Esto es parte de construir un país en serio, donde no se dé lugar a la trampa, al lavado de activos ni a los testaferros.

En este sentido, es fundamental que empecemos a replicar las mejores prácticas alrededor del mundo para desincentivar cualquier conducta contraria a la ley.



Honorable  
Cámara de Diputados  
de la Nación  
REPÚBLICA ARGENTINA

En el camino de desburocratizar, empezamos por simplificar los procedimientos para las empresas que quieren crecer e invertir en nuestro país.

Desde 2016 existe la posibilidad de crear una empresa en un día y exportar de forma más simple y rápida con la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Hoy continuamos en este camino, por ejemplo, eliminando el Registro Industrial de la Nación (RIN), que fue creado en 1972 con el objetivo de contar con información sobre el panorama industrial de nuestro país. Ese objetivo nunca se cumplió. Hoy el RIN tiene solo 1.700 empresas inscriptas cuando hay cerca de 110.000 empresas industriales en el país, lo que representa poco más del 1 por ciento.

Al mismo tiempo, otras dependencias, como la AFIP y el INDEC, tienen datos más completos sobre este universo que nos permitirán contar con información fehaciente del sector.

Estamos permitiendo que las empresas que figuran en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) puedan regularizar su situación con más velocidad. Se reducen los plazos de permanencia en el REPSAL a treinta días.

De esta manera, una vez que pagan la multa, estas empresas pueden volver a acceder a los programas de fomento y a líneas de crédito otorgadas por bancos públicos o licitar para realizar obra pública y seguir invirtiendo en esta Argentina que busca ser cada vez más productiva.

Sucedía que muchas empresas figuraban años en este registro a pesar de haber regularizado su situación. Al no poder operar, se veían obligadas a suspender empleados, lo que va en contra del espíritu de esta ley que se creó con el fin de proteger al trabajador.

Hace un tiempo el gobierno creó la plataforma de Trámites a Distancia para que el Estado sea cada vez más federal y cercano. Los ciudadanos de las provincias, que antes estaban obligados a viajar a Buenos Aires o contratar gestores, ahora pueden hacer más de seiscientos treinta y cuatro trámites a través de internet.

Con estas leyes seguimos federalizando y acercando el Estado a los argentinos, porque los usuarios podrán hacer sus reclamos por servicio ante el Enargas en cada provincia y ya no van a tener que viajar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.





Honorable  
Cámara de Diputados  
de la Nación  
REPÚBLICA ARGENTINA

Queremos una Argentina del siglo XXI permitiendo que los libros contables puedan llevarse en forma digital, abaratando costos, agilizando el proceso y volviéndolo más transparente.

Estamos modernizando el Estado a través de la incorporación de las nuevas tecnologías y todas las oportunidades de mejora que nos ofrecen. Modernizar, además, significa transparentar, porque ahora podemos hacer públicos muchos procesos que antes, por estar guardados en viejos biblioratos -en papel-, no eran accesibles. Esto es lo que venimos haciendo con las plataformas Contrat.ar, para las licitaciones de la obra pública, y Compr.ar, para las compras de bienes y servicios que fomentan la competencia y evitan la cartelización y los sobrepuestos, haciéndole ahorrar al Estado millones de pesos.

Hace dos años empezamos por digitalizar toda la Administración Pública Nacional a través de la incorporación del expediente electrónico, que funciona muy bien y ayuda a agilizar y transparentar todos los trámites y licitaciones.

Este cambio se hizo después de un siglo de usar papel en el Estado y de que los expedientes en papel se perdieran en el camino de una dependencia a otra.

En 2017 se generaron más de 2,3 millones de expedientes electrónicos, que no solo son más rápidos y más transparentes sino que también son más baratos.

Hoy los expedientes digitales pasan a tener la misma validez que un expediente en papel u otro formato para todo el país, en todos los niveles administrativos. Y vuelve obligatorio el uso de expediente electrónico para los oficios judiciales en todo el Sector Público Nacional.

También estamos digitalizando la industria de seguros, permitiendo que los contratos puedan probarse de cualquier manera y no solo en soporte papel.

En términos de transporte, la incorporación de bitrenes nos permite reducir los costos logísticos entre un 25 y un 30 por ciento y aumentar la capacidad en los camiones entre un 30 y un 60 por ciento, incrementando la productividad del sistema logístico de nuestro país.



Honorable  
Cámara de Diputados  
de la Nación  
REPÚBLICA ARGENTINA

De los treinta y un puertos públicos existentes, solo siete fueron habilitados. Es por esto que estamos eliminando la necesidad de un decreto presidencial para la habilitación de puertos. Con esta medida se agiliza el proceso de habilitación para los puertos públicos y particulares.

Un tercio de las normas sobre sanidad y calidad agroalimentaria ya no aplican. Fueron creadas hace años y aprobadas por gobiernos de facto. Otras estaban desactualizadas u obsoletas. Son leyes de 1800 (1888, 1891, 1898) sobre enfermedades y plagas que ya no existen o que fueron superadas por nuevas leyes que engloban estas problemáticas, y por eso las estamos derogando.

Estoy convencido de que con estas leyes que estamos votando hoy estamos construyendo un Estado que de verdad esté al servicio de la gente.

Cuando sabemos que más del 90 por ciento de las empresas argentinas son pymes, no podemos seguir poniéndoles trabas porque atentamos contra el desarrollo del país, la generación de empleo genuino y la competitividad a nivel mundial de nuestros productos.

Si a una empresa no la dejamos trabajar ni tomar créditos porque está inscripta en un registro de infractores -como el REPSAL- durante años, tiene que suspender o echar gente. Y esas son familias que se quedan sin ingresos.

Cuando a una persona, para hacer un trámite, la hacemos pasar por diez organismos para presentar los mismos papeles, esa persona desiste.

Tenemos que trabajar y legislar siempre conociendo la realidad y entendiendo todo el potencial que tenemos para mejorar nuestras instituciones. Y también adaptar nuestra normativa teniendo en cuenta las mejores prácticas del mundo, para transmitir confianza y estabilidad a nivel internacional.

Desburocratizar no significa que el Estado deje de hacerse cargo de las cosas y de su función. Significa que lo siga haciendo en forma cada vez más eficiente y de cara a las necesidades reales de los argentinos.



Honorable  
Cámara de Diputados  
de la Nación  
REPÚBLICA ARGENTINA

**Martín Lousteau, Sesión Ordinaria número 2, 21/03/2018, 136° Periodo Ordinario, Ley de simplificación y desburocratización para el desarrollo productivo de la nación. Expte. 6830-D-2017, Orden del día Nro. 22.**

Considero que el proyecto que estamos analizando, contiene algunas cuestiones que deben ser tenidas en cuenta.

En ese sentido, el 10 de enero de este año el Poder Ejecutivo nacional decretó por necesidad y urgencia una serie de disposiciones que modifican, amplían y derogan diversas leyes con el argumento de promover un funcionamiento dinámico y eficaz de la gestión pública, complementando así el Plan de Modernización del Estado. El interrogante que surge es el siguiente: ¿por qué una reforma tan minuciosa e integral sobre las cuestiones reformadas fue llevada adelante mediante un DNU?

Según la Constitución Nacional, para el dictado de los DNU se necesita cumplir dos parámetros que resultan fundamentales: las circunstancias excepcionales que hagan imposible el trámite legislativo y la necesidad y urgencia que debe exceder a la voluntad subjetiva del presidente, descartando cualquier apremio basado en su interés o conveniencia.

En palabras de Bidart Campos -Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino, Tomo II-B. Buenos Aires: Ediar, 2005- "la excepcionalidad no alcanza con alojar una mera inconveniencia, ni habilita a elegir discrecionalmente por criterios oportunistas y coyunturales, entre la sanción de una ley y la emanación más rápida de un decreto". Justamente, la gravedad de la emergencia, que se enmarca como una circunstancia excepcional, es la que debe requerir la medida inmediata haciendo imposible que el Congreso legisle, porque el trámite ordinario, por acelerado que pueda ser en el caso, no proporcionaría la solución urgente que se requiere.

Por si quedaba alguna duda acerca de la excepcionalidad de las facultades legislativas del Ejecutivo, la Constitución no solo se encargó de remarcar lo dicho en el párrafo anterior, sino que ni aun en acontecimientos extraordinarios podrán ejercerse dichas funciones específicamente en materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, por lo sensible de cada una de dichas temáticas. No obstante ello, deviene casi en una coyuntura histórica el uso y abuso



Honorable  
Cámara de Diputados  
de la Nación  
REPÚBLICA ARGENTINA

que los Poderes Ejecutivos, previo y posteriormente a la reforma constitucional de 1994, han dado a estos decretos. La mencionada reforma intentó plasmar un riguroso perímetro de excepcionalidad de los DNU pero, lamentablemente, no impidió que lo que tantas veces había sido violado antes, prosiguiera violándose después.

En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una sentencia en el fallo "Consumidores Argentinos c/ EN -PEN- Dto. 558/02 -ley 20.091 s/ amparo ley 16.986" -CSJN 19/05/2010- en la que sostuvo que los DNU fueron establecidos para atenuar el presidencialismo y que, por lo tanto, su uso por parte del Poder Ejecutivo debe ser limitado. Es así que la Corte dispuso que "El texto de la Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto". En el fallo "Verrocchi" -322:1726-, la Corte resolvió que para que el presidente de la Nación pueda ejercer legítimamente las excepcionales facultades legislativas que, en principio, le son ajenas, es necesaria la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias: que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución, vale decir, que las cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores a la Capital Federal; o que la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes.

Entonces, la discusión no gira solo en torno a algunas situaciones de fondo sino también a la forma. Es sabido que el Estado, con todos sus órganos, dependencias y distintas áreas de desarrollo, actualmente está desorganizado de manera tal que una reestructuración se torna necesaria, y que los trámites burocráticos que implica activar los mecanismos estatales son, actualmente, engorrosos e ineficientes, a punto tal de devenir absurdos varios de ellos. No obstante, esta situación no justifica que el PEN emita unilateralmente una modificación que penetra tan profundamente en los distintos estamentos de la administración, tanto a nivel nacional como distrital, máxime cuando no existe inconveniente alguno para que la misma se haga



Honorable  
Cámara de Diputados  
de la Nación  
REPÚBLICA ARGENTINA

mediante el procedimiento ordinario de la creación de leyes y tengan así el marco de un debate que reúna y represente a todos los ciudadanos del país.

Dicho esto, observamos en este DNU que no se cumplían los parámetros constitucionales para que estas disposiciones, por más positivas que fueran en algunos aspectos, se lleven adelante mediante dicho instrumento.

En particular, queremos manifestarnos respecto de los siguientes temas: En primer lugar, respecto del Capítulo I -Fondo fiduciario para el desarrollo del capital emprendedor – mipymes-, la modificación que se pretende implica una amplitud respecto de los alcances del Fondo. Sobre ello, nos preguntamos cuál es la finalidad de esta medida: ¿no sería más acertado crear una normativa específica para las mipymes teniendo en cuenta que éstas configuran un sector que requiere una legislación a su medida que les posibilite competir con el resto de las empresas? ¿La intención es incorporar a las micropymes al mercado? En caso afirmativo, ¿de qué manera? ¿Tiene previsto el gobierno algún proyecto de emprendedurismo social? La finalidad de estos comentarios no tiende a criticar lo instaurado sino a averiguar cuáles son las reales intenciones del gobierno en cuanto a este Fondo, y de qué manera se intenta fomentar la participación de sus beneficiarios en el mercado.

En segundo término, en relación con el Capítulo II -Fondo de garantía argentino- cabe señalar sobre esta temática -en el mismo sentido que el acápite anterior- que se modifica el objeto del ex Fogapyme, que consistía en otorgar garantías a fin de mejorar las condiciones de acceso al crédito de las micro, pequeñas y medianas empresas, y con la propuesta de ley presentada, se pretende ofrecer garantías a fin de mejorar las condiciones de acceso al crédito de las personas que desarrollen actividades económicas y/o productivas en el país. Con esta modificación se equipara a las empresas en general, en desmedro de las mipymes, que debieran tener una situación de mejora y beneficio para lograr un mayor crecimiento y productividad.

Respecto del Capítulo III -Sociedades de garantía recíproca-, consideramos objetable la modificación del artículo 33 de la ley 24.467, en tanto realiza una ampliación de otorgamiento de garantías a terceros de las SGR, lo que implica que ya no será un beneficio exclusivo de micropymes. Vale destacar que estas sociedades fueron creadas con el objeto de facilitar a las



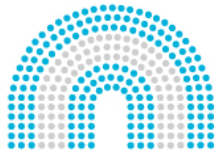
Honorable  
Cámara de Diputados  
de la Nación  
REPÚBLICA ARGENTINA

pymes el acceso al crédito, y por tal motivo, la posibilidad de que puedan otorgar garantías a terceros podría coartar su desarrollo.

En el Capítulo IV –Sociedades-, el artículo 34 del proyecto en análisis modifica el inciso 4 del artículo 36 de la ley 27.349, en lo relativo a la designación de su objeto. En la redacción anterior se establecía que el objeto de las sociedades por acciones simplificadas (SAS) debía enunciarse en forma clara y precisa, es decir, especificar sus actividades principales. Entendemos que es un desacierto eliminar estos requisitos de claridad y precisión, ya que debieran subsistir para permitir mayor control y transparencia de las sociedades citadas. Este es uno de los casos en los que pareciera que la intención del gobierno es propender a una menor transparencia y tender, así, a un menor control.

Sobre el Capítulo VII -Obras de arte- pretendemos observar lo siguiente: En primer lugar, la modificación del artículo 11 de la Ley 24.633 prevé que la reglamentación establezca la cantidad de obras de arte que podrán ser exportadas bajo el régimen de equipaje acompañado por viaje y por persona, omitiendo decir que también es necesario que se reglamente las otras categorías que el mismo artículo menciona, o sea, “equipaje no acompañado” y “encomienda”. Esta técnica legislativa resulta incompleta, en tanto no brinda precisión sobre qué sucederá en otros supuestos. Vale destacar que con fecha 9 de marzo del corriente, en el anexo I del decreto 217/2018 el Poder Ejecutivo reglamentó este artículo, estableciendo -en el artículo 11- que “...bajo el régimen de equipaje acompañado, pueden ser exportadas o importadas, hasta quince (15) obras de arte por persona por viaje”. En este sentido, estamos discutiendo una modificación que, al igual que los demás capítulos, están vigentes dado que el DNU no fue invalidado, y peor aún, ya ha sido reglamentado por el Poder Ejecutivo. Teniendo en cuenta que estamos tratando tres proyectos que aún no fueron sancionados por este Poder Legislativo, nos encontramos ante el avasallamiento de las facultades del mismo cuando otro Poder -el Ejecutivo- sigue decidiendo sobre algo que aún no fue sancionado por quienes representamos al pueblo y a las provincias.

En segundo término, el artículo 50 del proyecto en cuestión modifica el artículo 13 de la ley 24.633, estableciendo los términos en que podrán ser exportadas las obras de arte. Particularmente, en el punto 1 implementa como único requisito el Aviso de Exportación que



Honorable  
Cámara de Diputados  
de la Nación  
REPÚBLICA ARGENTINA

deberá ser realizado ante la Autoridad de Aplicación y podrá ser solicitado por la autoridad aduanera al momento de salida del país. Es decir, deja en facultad de la misma la exigencia o no de dicho documento, posibilitando que no sea demandado y consecuentemente con ello, dificultando cualquier control y prevención del tráfico de obras.

Por último, se modifica el artículo 14 de la ley 24.633, legislando que la Dirección General de Aduanas quedará exceptuada de verificar e inspeccionar las obras y que el valor de las mismas será la valuación que el solicitante haya estipulado en su declaración jurada, lo que a todas luces nos resulta preocupante, en tanto le quita a la Dirección mencionada la posibilidad de realizar la debida inspección, flexibilizando en su totalidad el control aduanero.

Respecto del Capítulo VIII -Promoción del trabajo- debo señalar, en primer lugar, que cuando en el año 2014 se trató la creación del REPSAL, presentamos observaciones en las que dejamos en claro que los incentivos planteados por ese proyecto no eran suficientes para reducir la informalidad en el mundo del trabajo. Ello ocurre por tres razones: el contexto macroeconómico volátil; la composición del trabajo informal, y su vinculación con otras variables socioeconómicas. Es decir que seguir modificando esta ley no va a lograr reducir el empleo informal en nuestro país, habida cuenta de que ello se solucionaría con una reforma estructural del sistema laboral.

En ese marco, el proyecto en tratamiento reduce los plazos de permanencia en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales en los supuestos "en que el empleador acredite la imposibilidad fáctica o jurídica de cumplir con la regularización de la conducta que generó la sanción", que estaban previstos en 90 y pasan a ser 30 días, lo que flexibiliza las sanciones para un empleador que comete una infracción, incumpliendo normativas que podrían perjudicar a los trabajadores. Consideramos importante hacernos la siguiente pregunta: ¿No resulta esto injusto con aquellos que sí cumplen? Asimismo, reflexionamos sobre si se están colocando los incentivos en el lugar correcto, es decir: ¿efectivamente esto ayudaría a generar más empleo o únicamente a desburocratizar o modernizar el Estado, sin considerar los derechos de los trabajadores?

Cuando en 2014 se trató la ley que creó el REPSAL, existieron muchas críticas hacia el sistema que se establecía. En este contexto, no se plantea la derogación del Registro sino que ante la imposibilidad de cumplir, se dispone un recorte en el plazo de permanencia en el mismo.



Entonces, estamos de acuerdo y a favor de todo aquello que signifique la generación de mayor empleo y genuino, pero dudamos que esta sea la forma de lograrlo.

Por otro lado, consideramos desacertada la modificación del artículo 9° de la ley 26.940, en tanto prevé infracciones graves por las que, una vez pagada la multa, se mantendrá por 30 días más subsiguientes al infractor en el REPSAL, mientras que en la redacción anterior la conducta infractora tenía una sanción gradual dependiendo de su gravedad.

Por último, esta reforma deroga el agravamiento de la sanción por obstrucción a inspecciones del trabajo, lo que estimamos es otro desacierto ya que estas conductas, tendientes a imposibilitar o entorpecer la inspección estatal del cumplimiento de requisitos que surgen de las leyes laborales, deben mantener una sanción mayor, porque justamente hay un incumplimiento adicional. Consideramos que es grave admitir la obstaculización de la labor del organismo encargado del control y sin más quitarle la sanción al empleador infractor siendo que esto puede significar una inequidad respecto de los empleadores que no entorpecen la labor del Estado y, por supuesto, de los trabajadores a su cargo.

En el Capítulo IX -Sistema métrico legal- encontramos observable la modificación del artículo 38 de la ley 19.511, en cuanto impone como requisito el pago de una multa para que se conceda el recurso. Esto puede dificultar el acceso a la Justicia, resultando, en otras palabras, un arancel para acceder a la misma. Por lo tanto, entendemos necesaria la supresión del párrafo que así lo establece.

En cuanto al Capítulo XIV -Acceso al crédito. Inclusión financiera-, nos resulta de extrema preocupación la modificación de los artículos 131 y 134 del proyecto en estudio, en tanto se permite la libre compra y venta de monedas y billetes extranjeros, oro amonedado o en barra de buena entrega y cheques de viajero, giros, transferencias u operaciones análogas en moneda extranjera, ya que debiera haber un control y profesionalización de quienes comercialicen divisas extranjeras y un mayor debate de cómo se evitará que exista lavado de activos en las operaciones. En otros países -Colombia, por ejemplo- se prevé la figura de compradores profesionales, lo cual permite un mayor control ya que define parámetros y normas que encuadran la actividad. En el mismo sentido, no concordamos con la derogación del artículo 4° de la ley 18.924, ya que éste





Honorable  
Cámara de Diputados  
de la Nación  
REPÚBLICA ARGENTINA

establecía las prohibiciones de aquellos que no podían ser promotores, fundadores, titulares, directores, entre otros, de casas y agencias de cambio. Así las cosas, con la redacción propuesta, aquellos condenados por delitos contra la propiedad, la administración pública y la fe pública, los fallidos por quiebra fraudulenta o culpable, entre otros supuestos, bien podrían ejercer esta actividad.

Finalmente, nos oponemos a la modificación del artículo 7° del decreto 1.570 de fecha 1º de diciembre de 2001, que suprime la previa autorización del BCRA que debían tener las entidades financieras y cambiarias para realizar la exportación de billetes y monedas extranjeras y metales preciosos amonedados. Dicho desacuerdo radica en que esto produce que exista una instancia menos de control, con todo lo que ello implica, máxime si tenemos en cuenta que el manejo de dinero debe ser controlado y transparente. Ello es recomendado por todos los organismos internacionales que entienden en la materia.

Las observaciones planteadas reflejan lo que creemos: debe discutirse con rigurosidad; los proyectos son perfectibles por lo que las propuestas de otros espacios pueden ayudar a mejorar lo regulado; y debemos ser responsables a la hora de debatir sobre temas que atañen a la administración del Estado.

Es por esto mismo que celebramos que cuestiones tan controvertidas y discutibles como las posibles inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES -propuesto en el proyecto 6829-D-2018-, hayan sido dejadas de lado para, en todo caso, discutir las con mayor compromiso y mayor información en otra oportunidad.

En ese sentido, y en relación con este proyecto en particular, consideramos que no puede permitirse que el costo de la burocratización del Estado se resuelva con falta de transparencia y una flexibilización de los controles. Ambos, la transparencia y el control, son pilares fundamentales de un Estado democrático.



Honorable  
Cámara de Diputados  
de la Nación  
REPÚBLICA ARGENTINA

**Facundo Moyano**

Orden del Día 23 – Simplificación y desburocratización para el desarrollo de la infraestructura

Expediente Nº 6828-D-2017

Día de Sesión Ordinaria: 21/03/18

En relación con los proyectos de ley que hoy se tratan en esta Cámara, y dejando de lado en honor a la brevedad otras cuestiones contempladas en los mismos que ciertamente merecen toda nuestra atención en relación con su grave impacto social, voy a enfocarme en algunas de las medidas más cuestionables que el Poder Ejecutivo se propone convertir en ley en el ámbito del tránsito y el transporte.

Lo paradójico es que estamos discutiendo sobre reformas que ya están en vigencia, porque el presidente Macri, en un total desprecio de la división republicana de poderes, y reproduciendo los vicios de gestión que criticaba cuando se encontraba en la oposición, puso estas reformas en vigencia mediante la sanción intempestiva e injustificada de un decreto de necesidad y urgencia.

El exceso de discrecionalidad y desprecio del Ejecutivo sobre las necesidades del sector del transporte y del público en general se manifiesta en las disposiciones directamente ligadas a la seguridad vial.

Así, avanza en profundas modificaciones sobre las exigencias en materia de medidas y pesos máximos permitidos a los vehículos que circulan en nuestras rutas contenidas en el artículo 53 de la Ley Nacional de Tránsito, pero además debilita a este Congreso al delegar facultades legislativas que le son propias en cabeza del Ministerio de Transporte.

Todo esto para imponer nuevamente el uso de los llamados camiones bitrenes. ¿Y por qué digo nuevamente? Porque la circulación de estos vehículos, a todas luces riesgosa, ya había sido motorizada, también vía decreto, por el gobierno de la doctora Fernández de Kirchner, y



Honorable  
Cámara de Diputados  
de la Nación  
REPÚBLICA ARGENTINA

cancelado luego de la repulsa generalizada tanto de las ONG ligadas a la seguridad vial y a las víctimas de accidentes de tránsito, del sector de los trabajadores camioneros, como también de las diversas federaciones que nuclean al sector empresario del transporte.

Con las nuevas modificaciones, aumentan la longitud máxima permitida de los vehículos habilitados a circular en nuestras rutas prácticamente en un 50 por ciento, llevándola a 30 metros con 25 centímetros. En el mismo sentido, el peso máximo permitido casi se duplica, pasando a las 75 toneladas. Pero además, estas medidas podrían ser modificadas con la sola firma del Ministro de Transporte, en virtud de la delegación de facultades legislativas que se hace.

Todos estos cambios se implementan sin que haya existido ningún estudio serio y contrastable sobre la potencial proyección de los mismos sobre los ya altísimos índices de siniestralidad vial, y también sobre los niveles de empleo y ocupación de los trabajadores del sector.

Efectos por aumento de longitud. Es sabido que el camión bitren aumenta el riesgo de circulación vial, entre otras razones, porque aumenta el riesgo de sobrepaso y suma problemas si circula por rutas convencionales o por zonas urbanas. Un ejemplo, un automóvil que circula a 110 kilómetros por hora necesitará 70 por ciento más de tiempo y de recorrido para sobrepasar a un bitren, a 80 kilómetros por hora, que a un camión común.

También la experiencia internacional demuestra que estos vehículos solo pueden circular de forma relativamente segura en autopistas, cuando en la República Argentina más del 90 por ciento de la red vial está conformada por rutas convencionales.

Efectos por aumento de peso. En relación con el aumento de peso permitido a casi el doble del actualmente habilitado, también redunda en un grave impacto sobre la seguridad vial. No solo porque las dificultades de manejo de un vehículo aumentan exponencialmente al aumentar el peso del mismo, sino también por el impacto que los nuevos pesos tendrán sobre la ya deteriorada infraestructura vial nacional, la cual hoy día es la causa de un importante porcentaje de los siniestros viales. Y con estas modificaciones no haría más que agravarse.



Honorable  
Cámara de Diputados  
de la Nación  
REPÚBLICA ARGENTINA

Tampoco podemos desconocer que nuestra red vial se conecta con cientos de puentes, los cuales a duras penas soportan los pesos máximos hasta hace poco permitidos y que hoy casi se duplican.

Sin ir más lejos, el Ejército Argentino, probablemente la institución con mayor conocimiento de la geografía nacional, limitó el peso de sus tanques de guerra en 35 toneladas, en tanto detectó mediante diversos estudios que de tener mayor peso se dificultaría la circulación de los mismos por las limitaciones de nuestra infraestructura vial.

Para finalizar, quiero señalar también que la adopción de los bitrenes asimismo se traducirá en la concentración del transporte automotor en grandes empresas por los costos que representa esta nueva tecnología; en una disminución en las fuentes de trabajo para los choferes de camiones, y en una competencia directa sobre el ya castigado modo ferroviario de transporte.

Por último, quiero traer a este recinto una frase que se ha vuelto, con toda razón, una bandera popular: "La corrupción mata". En tal sentido, me resulta extremadamente sugestivo que una megaempresa, que ha venido impulsando la adopción de los bitrenes en propio interés estos últimos años, haya puesto en circulación camiones bitrenes prácticamente al otro día de sancionado el decreto.

No veo como algo intrínsecamente criticable el afán de lucro de una empresa particular, pero sí creo que resulta lamentable que los funcionarios del Estado deserten de sus facultades de control y obligaciones tutelares sobre la ciudadanía por cumplir en favor de intereses empresarios.

#### **INSERCIÓN DIPUTADA NACIONAL ALMA LILIANA SAPAG**

**TEMAS:** PROYECTO DE LEY, SIMPLIFICACION Y DESBUROCRATIZACION PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA. REGIMEN

**ORDEN DEL DÍA: 23**

**EXPEDIENTE Nro.: 6828-D-2018**



Honorable  
Cámara de Diputados  
de la Nación  
REPÚBLICA ARGENTINA

En particular en lo que se refiere a lo dispuesto en el Orden del Día N° 23, considero aceptable simplificar la habilitación de los puertos y reconocer los existentes que vienen funcionando sin las habilitaciones correspondientes.

Ahora bien, pedimos al Poder Ejecutivo que estas medidas las acompañe con un incremento de los controles en los puertos existentes para evitar el contrabando y el narcotráfico, dos peligros latentes en los puertos argentinos.

En lo que se refiere a la aviación civil, coincidimos en la necesidad de centralizar la administración en la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.), con el fin de evitar demoras en cuanto a la prestación adecuada y eficiente del servicio público de navegación aérea.

También consideramos como algo positivo el objetivo de tener licitaciones públicas más ágiles utilizando las nuevas tecnologías, en especial los sitios web, en lugar de las tradicionales publicaciones en los boletines oficiales de los distritos implicados, aunque entendemos que ambas pueden y deben coexistir.

El expediente en cuestión también introduce modificaciones en cuanto al tránsito y la seguridad vial. Los cambios más importantes propiciados encuentran un objetivo común destinado a la ampliación de la capacidad de transporte de los vehículos de carga interjurisdiccional y la optimización de las condiciones exigidas para su circulación, redundando en una mejora de la productividad nacional y en los costos de transporte.

Por último, debo expresar mi coincidencia en la decisión de establecer que la Agencia Nacional de Seguridad Vial sea el único organismo que, a nivel nacional, aborde de manera integral la temática de la seguridad vial.

Por todo lo expuesto, acompaño con mi voto el proyecto en tratamiento.



Honorable  
Cámara de Diputados  
de la Nación  
REPÚBLICA ARGENTINA

## **INSERCIÓN DE LA DIPUTADA NACIONAL ALMA LILIANA SAPAG**

**TEMAS:** PROYECTO DE LEY. SIMPLIFICACION Y DESBUROCRATIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL. REGIMEN.

**EXPEDIENTE Nro.: 6829-D-2017**

Señor presidente: en lo que respecta al proyecto de ley del señor diputado Negri contenido en el expediente 6.829-D.-2017, quisiera decir que, en general, comparto lo vertido en él. Estoy de acuerdo en que la firma digital va a ser un gran avance para la gestión y los controles vía *online* de todos los trámites y expedientes electrónicos.

Puedo dar fe de lo provechoso que es este procedimiento porque la provincia del Neuquén lo utiliza desde 2016. La continuidad del proceso para dejar de lado el uso del papel en todos los ámbitos de la administración pública colabora no sólo a hacer de la gestión algo más eficaz en términos de ecología, sino también en cuanto a la eficacia al momento de hacer el seguimiento del desempeño de la gestión pública y la administración. En tiempos de hiperconectividad, considero que como Estado debemos dirigirnos en ese sentido.

Sin embargo, creo conveniente mencionar que a la provincia del Neuquén le faltan centenares de kilómetros de fibra óptica comprometida por Arsat en el marco del Plan Nacional Argentina Conectada. Sin dudas esta situación se replica en otras provincias. En esta materia, considero que aún nos queda mucho camino por recorrer.

En lo referido al Capítulo II del proyecto, entiendo que las modificaciones de los artículos de la ley 25.246 y sus modificatorias, se orientan hacia mecanismos más ágiles y transparentes en el acceso a la información financiera, puesto que se establece que las investigaciones llevadas adelante por la Unidad de Información Financiera (UIF) no sólo puedan ser entregadas al



Ministerio Público Fiscal, sino también a los jueces del Poder Judicial que requieran esa información.

Además se dota al organismo de una mayor cantidad de herramientas para que no sólo analice datos formales de las operaciones sospechadas, sino también para que se investigue y defina quiénes son los verdaderos beneficiarios de las operaciones de alto riesgo financiero investigadas.

Sin más que agregar, adelanto que acompañaré el presente proyecto de ley.

#### **INSERCIÓN DIPUTADA NACIONAL ALMA LILIANA SAPAG**

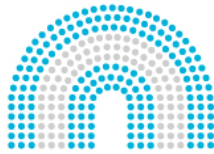
**TEMAS:** PROYECTO DE LEY. SIMPLIFICACION Y DESBUROCRATIZACION PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA NACION. REGIMEN.

**ORDEN DEL DÍA: 22**

**EXPEDIENTE Nro.: 6830-D-2017**

En cuanto al Orden del Día N° 22 debo decir que me parece fundamental que se apoye a los emprendedores en el proceso de convertirse en gestores de su propio negocio.

El proyecto de ley en tratamiento me hace pensar ineludiblemente en mi provincia porque en Neuquén en el año 1998, por ley 2.246, se creó el Centro Pyme Adeneu que tiene como principal objetivo ser sostén, asesor, promotor y socio de los emprendedores desde que tienen una idea hasta que la concretan en un proyecto de negocio. Además, posee dos líneas de programa, una destinada a emprendimientos urbanos y otra, a iniciativas agroindustriales. Dentro



Honorable  
Cámara de Diputados  
de la Nación  
REPÚBLICA ARGENTINA

de ellas podemos destacar programas para turismo, infotecnología, hidrocarburos, vitivinicultura, fruta fina, frutos secos y ganadería bovina.

Es decir que desde hace 20 años los neuquinos pensamos en los emprendedores y en el invaluable aporte que ellos realizan para el desarrollo de nuestras economías regionales. Por eso, y fomentando estas iniciativas, en el año 2008 por ley 2.612 se creó la Fiduciaria Neuquina S.A.

Considero que todas aquellas leyes que se posicionen en la mirada de diversificar la matriz de competitividad por rama productiva, tienden a establecer condiciones más equánimes en el acceso a los mercados. En consecuencia, su normativa es esencial para un emprendedor.

Por lo expuesto, acompañaré el proyecto de ley en tratamiento.